



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

ORDEN**NÚMERO 1417/2025**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Expte.: **AM-003/2022-21-C4838** (A/SER-001385/2022)

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

Examinados los documentos obrantes en el expediente procede resolver teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Mediante Orden 2145/2022, de 14 de octubre, de la entonces Consejería de Familia, Juventud y Política Social, se adjudicó el Acuerdo Marco de servicios “ATENCIÓN RESIDENCIAL CON CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS”.

SEGUNDO. Con fecha 16 de noviembre de 2022 se formalizó el mismo con la entidad SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES S.L. (NIF B85515633) para el centro ofertado por esta entidad, denominado “Residencia Almanzor” (C4838).

En el documento de formalización, se establecieron las siguientes condiciones:

- Nº de plazas: 28 plazas.
- Precio/ plaza (sin IVA): 86,33 euros.

TERCERO. Mediante Orden 235/2023, de 3 de febrero, se adjudicó un contrato basado por 28 plazas de atención diurna y residencial para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas con la entidad SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES S.L. en el citado centro “Residencia Almanzor” C4838, por un importe de 1.837.682,53 euros (4% IVA incluido), y con una duración desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 28 de febrero de 2025.

CUARTO. Con fecha de registro de entrada de 21 de marzo de 2024 la entidad adjudicataria, SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES S.L., comunica mediante escrito que, debido a la falta de recursos económicos suficientes para mantener en funcionamiento su centro para la atención residencial y atención diurna a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, ha decidido proceder al cierre del mismo el 31 de mayo de 2024, lo que determinará, en consecuencia, el cese de la ejecución del Acuerdo Marco y del contrato basado para la totalidad de las plazas adjudicadas a la entidad por imposibilidad de continuar prestando los servicios de atención diurna y residencial objeto de los mismos.

QUINTO. A partir de la comunicación del cierre del centro, desde la Dirección General de Atención de Personas con Discapacidad se han tomado las medidas oportunas al objeto de garantizar la atención que vienen recibiendo las 28 personas usuarias de este Centro, a través de su reubicación en plazas del resto de Centros adheridos al Acuerdo Marco de “ATENCIÓN RESIDENCIAL CON CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS”, en función de sus necesidades, a los efectos de causar el menor perjuicio posible en la atención que precisan estas personas usuarias.



SEXTO. Con fecha 10 de abril de 2024, se recibió informe de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, relativo a la procedencia del inicio del procedimiento de resolución del contrato de referencia. La propuesta de resolución se basa en el incumplimiento culpable de la obligación principal del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 211.1.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y, por tanto, se propone el inicio de la resolución del contrato basado en esta dicha causa.

SÉPTIMO. Mediante Orden 1284/2024, de 16 de abril, se acuerda el inicio del procedimiento de resolución del citado contrato.

OCTAVO. Mediante dictamen 768/24, de 4 de diciembre de 2024, la Comisión Jurídica Asesora concluyó que procedía la resolución del contrato citado.

NOVENO. Mediante Orden 169/2025, de 12 de febrero, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se acordó la caducidad del procedimiento de resolución del acuerdo marco y de su contrato basado mencionado, por el transcurso del plazo de 8 meses establecido en la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, ordenándose el archivo de las actuaciones.

DÉCIMO. Mediante Orden 296/2025, de 18 de febrero, se acuerda el inicio del procedimiento de resolución del Acuerdo Marco de servicios denominado "ATENCIÓN RESIDENCIAL CON CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS", adjudicado a la entidad SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES S.L. (NIF B85515633), y de su correspondiente contrato basado, por incumplimiento de la obligación contractual principal.

En este nuevo procedimiento de resolución contractual se acuerda la conservación del informe de 10 de abril de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, relativo a la procedencia del inicio del procedimiento de resolución del contrato de referencia.

Asimismo, se acuerda conceder un nuevo trámite de alegaciones al contratista para que, en el plazo de diez días naturales, formulen las alegaciones y presenten los documentos o justificaciones que estimen pertinentes.

Pasado este plazo, el contratista no presenta alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hay que señalar que la caducidad declarada por Orden 169/2025, de 12 de febrero, no impide iniciar de nuevo el expediente de resolución, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el nuevo procedimiento de resolución que se inició con la citada Orden 296/2025, de 18 de febrero, se conserva el informe de 10 de abril de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, relativo a la procedencia del inicio del procedimiento de resolución del contrato de referencia. Se entiende que se trata de un trámite cuyo contenido se

mantendría de igual forma si no se hubiera declarado la caducidad del procedimiento. No obstante, sí se le concedió de nuevo el trámite de alegaciones al contratista.

SEGUNDO.- Si bien en este nuevo procedimiento no se han presentado alegaciones, sí que debemos hacer referencia a las alegaciones que el contratista presentó en el procedimiento caducado. El contratista manifestó en su momento, entre otros, los siguientes motivos para no continuar con la prestación de los servicios contratados:

- La falta de actualización de precios del IPC en los contratos de acuerdo marco con vigencia de atención a personas con discapacidad, debido a la aplicación de la Ley 2/2015 de Desindexación de la economía española.
- Los grandes ajustes producidos durante los últimos diez años en gestión de los servicios de atención residencial, como consecuencia de la gran crisis de 2008, incluyendo en algunos casos recortes de ratio (2012 y 2014) y, en otros, de incrementos de ratios sin su correspondiente repercusión en el importe plaza ocupada/día (2018).
- La ausencia de una cláusula de revisión de precios en los diferentes pliegos de los acuerdos marco con la finalidad de regularizar el precio derivada de la posible variación de los costes a soportar por el contratista, tendiendo de este modo a la adecuación del mismo a la realidad y el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato durante su vigencia.
- Los costes de personal en los recursos que gestiona superan el 70% de los costes totales, con el consecuente impacto del incremento del Salario Mínimo Interprofesional.
- La falta de ocupación total de las plazas ofertadas por la entidad en los diferentes acuerdos marco suscritos.
- El sobrecoste añadido en costes de transporte para desplazar a las personas usuarias del centro ocupacional y centro de día desde sus domicilios a los correspondientes servicios dado que sus instalaciones se encuentran en Pozuelo de Alarcón, en la periferia de la ciudad de Madrid.
- Las variaciones recurrentes al alza de los costes de la energía, los alimentos, el transporte, el servicio de limpieza y lavandería, que igualmente suponen un considerable porcentaje de los costes totales, siendo éstos indispensables en la prestación de los servicios.
- La ausencia de flujos de financiación debido al vencimiento de la póliza de crédito suscrita con una entidad bancaria a partir del junio de 2024, que no va a posibilitar atender sus obligaciones económicas y prestación de servicios.

TERCERO.- Asimismo, alegó que el cese de la actividad y de la suspensión de los servicios contratados no derivó en perjuicio alguno para los usuarios ni tampoco para la Administración, dado que el servicio público y el interés general no ha sufrido daño ninguno por la finalización de los servicios prestados por la entidad. La entidad comunicó a la Administración con la suficiente antelación su intención de no continuar realizando la actividad para prevenir posible aumento de pérdidas y falta de garantía de prestación de servicio a las personas usuarias.

CUARTO.- En este sentido, y aunque las alegaciones aludidas fueron presentadas en el anterior procedimiento de resolución y en el actual no se ha realizado ninguna alegación, se considera conveniente entrar en el fondo de las mismas para rebatirlas. Como señaló la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad en su informe de 14 de mayo de 2024, la entidad

SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES S.L., desde el momento en que concurrió a los diversos procedimientos de licitación, se sometía a las bases de cada uno de ellos, aceptando las condiciones económicas y de prestación de los servicios para cada uno de los acuerdos marco suscritos durante el tiempo previsto.

De acuerdo con lo que establece el 197 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y tal y como reflejan los diferentes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, la ejecución de los contratos basados en el Acuerdo Marco se realizará a riesgo y ventura del contratista, y por tanto dicha entidad era libre o no de presentarse al mismo.

Asimismo, las condiciones suscritas en los documentos de formalización de los diferentes acuerdos marco establecen las obligaciones de las partes firmantes, obligándose la entidad a mantener disponibles las plazas ofertadas en los mismos por un periodo de 4 años. Posteriormente, en función de la necesidad de continuidad en la atención que se venía prestando a las personas usuarias de dichos centros y de la demanda de plaza en los mismos, se suscribieron los contratos basados en dichos acuerdos marco por periodos iniciales de 24 meses.

El artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), concede al órgano de contratación la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Son los artículos 211, 212 y 213 de la LCSP los que regulan las causas de resolución, la aplicación de las mismas, así como sus efectos.

QUINTO.- En el supuesto que nos ocupa, el objeto del contrato basado del Acuerdo Marco de servicios de “ATENCIÓN RESIDENCIAL CON CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS” consiste en poner a disposición 28 plazas de atención diurna y residencial para la atención de personas adultas con discapacidad intelectual y situación de dependencia residentes en la Comunidad de Madrid en el centro C4838 “Residencia Almanzor”, perteneciente a la entidad mencionada.

En estas 28 plazas contratadas, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas por el que se rige el citado acuerdo marco, se debe ofrecer una atención de alojamiento, manutención, habilitación, cuidado y apoyo personal y social en el grado que sea necesario para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, actividades de fomento del ocio y la normal convivencia y atención rehabilitadora especializada, a fin de evitar la progresión de situaciones de deterioro y promover el mantenimiento y desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social.

Por tanto, el cierre del centro citado supone no seguir prestando el servicio residencial con centro de día a los usuarios de esas 28 plazas, esto es, implica el incumplimiento de la obligación principal del contrato.

SEXTO.- Incurre el contratista en una de las causas generales de extinción de los contratos, regulada en el artículo 211.1.f) de la LCSP, que establece que será causa de resolución el incumplimiento de la obligación principal del contrato. Se trata en definitiva de una resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista que, a partir del 1 de junio de 2024, deja unilateralmente de prestar el servicio cuando la vigencia del contrato se extendía hasta el 28 de febrero de 2025.



SÉPTIMO.- De conformidad con el artículo 212.1 de la LCSP, *“la resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca”*.

Por su parte, el artículo 213.3 de la LCSP establece que, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. En consecuencia, la incautación de la garantía depositada por la entidad opera de manera automática.

La incautación de la garantía opera como indemnización de los perjuicios que dicho incumplimiento contractual provoca al interés público, que es el de suspender la gestión de un centro de atención diurna y residencial para la atención de personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas en situación de dependencia.

Hay que señalar que la no continuidad en la prestación del servicio ha obligado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a organizar en el plazo de dos meses (periodo comprendido entre la notificación del cierre del centro el 21 de marzo de 2024 y la efectividad de la medida el 31 de mayo de 2024), la reubicación de los 28 usuarios atendidos en el centro “Residencia Almanzor” entre el resto de centros residenciales de centro de día de la red concertada de atención a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas con las cuales la Consejería tiene plazas adjudicadas en virtud del Acuerdo Marco 003/2022.

Tal y como se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, uno de los criterios prioritarios de adjudicación de plazas por la que se contrataron plazas con la entidad SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES S.L. era el relativo a dar continuidad a su atención: *“...De forma prioritaria se contratarán las plazas teniendo en cuenta los usuarios que ya están siendo atendidos en plaza pública en cada uno de los centros a fin de asegurar la continuidad de la atención...”*

La resolución del contrato con la entidad SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES S.L. supone un perjuicio para los usuarios y sus familias, que tienen que trasladarse forzosamente de centro por causas no imputables a ellos, y un perjuicio para la Administración.

Vista la propuesta de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad y las alegaciones e informes que obran en el expediente, y en aplicación de los artículos 211, 212 y 213 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y, de conformidad con los informes del Servicio Jurídico y de la Intervención General, y el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid y, previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 21 de mayo de 2025

DISPONGO

PRIMERO.- Acordar la resolución del Acuerdo Marco de servicios “ATENCIÓN RESIDENCIAL CON CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS” adjudicado a la entidad SERVICIOS SOCIALES HABILITADORES S.L., y de su correspondiente contrato basado, por incumplimiento de la obligación contractual principal.

Esta resolución deja sin efectos la medida cautelar de suspensión del contrato acordada en la Orden 296/2025, de 18 de febrero, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.



La resolución del contrato tendrá efectos desde el día siguiente a la notificación de esta Orden.

SEGUNDO.- Acordar la incautación automática de la garantía definitiva constituida por el licitador, con números de resguardo 202355002734Z y 202355002233L, por importe total de 88.350,12 euros, en aras a garantizar el pago de los daños y perjuicios derivados de esta resolución.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid,
a fecha de firma

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
(P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)
EL VICECONSEJERO DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Firmado digitalmente por: GOMEZ-TAVIRA GOMEZ-TAVIRA PABLO
Fecha: 2025.05.26 12:14